

La industria, en alerta por la escalada energética

► Foment del Treball lanza un SOS y exige un plan de choque inmediato para evitar el cierre de plantas y la pérdida de empleo

Inma Bermejo. MADRID

Las fábricas ya están apagando máquinas en las horas más caras del día y la patronal catalana advierte de que este puede ser solo el principio de una crisis industrial de enormes dimensiones si no se toman medidas inmediatas. Foment del Treball lanzó ayer un SOS por la industria ante una escalada energética por la guerra en Oriente Medio que, advierte, «amenaza la competitividad, la producción y el empleo». El gas natural ha pasado de 32,4 euros/MWh en febrero a 77,8 euros en septiembre –un 140% más–, y la electricidad mayorista española ha más que duplicado su precio en un año, llegando a los 142,7 euros por megavatio en septiembre. Sin respuesta del Gobierno, avisa Foment, se agravará

el deterioro industrial, se multiplicarán las paradas productivas, los cierres de plantas y los despidos. Para la industria, el encarecimiento simultáneo de ambas energías puede resultar mortal. El gas y la electricidad no son solo un gasto corriente en sectores como el químico, el textil o el siderúrgico, sino un insumo directo del proceso productivo. Según Foment, el incremento de la factura energética «reduce los márgenes de las empresas, dificulta las inversiones» y sitúa a determinadas actividades «ante decisiones que pueden resultar irreversibles». La patronal considera además inaceptable que la industria compita con otras economías europeas «soportando una desventaja de costes» que, a su juicio, pone en cuestión la viabilidad de las propias instalaciones productivas.

Foment pone de ejemplo el sector químico –uno de los más afectados– para dimensionar el impacto. Según las estimaciones elaboradas en septiembre, el sobre coste energético de la industria química acumulado hasta el 31 de agosto ascendía a 354 millones, de los que 215 millones corresponden al gas y 139 millones a la electricidad. Si se mantienen las condiciones previstas, la factura adicional podría acercarse a los 1.000 millones al cierre de 2026.

La industria española, además, llega a este episodio con las defensas bajas. Los datos de comercio exterior del primer semestre ya reflejaban una caída del 2,75% de las exportaciones y un aumento del 5,22% de las importaciones, y eso antes de los momentos más agudos de la crisis energética. La industria, resume la patronal, «no puede seguir absorbiendo estos incrementos en un contexto de demanda débil y competencia internacional intensa».

Foment advierte de que ya se están produciendo ajustes de carga y paradas puntuales en procesos industriales durante las horas de mayor coste energético. Son decisiones coyunturales, pero alerta de que si la escalada persiste, pueden «desembocar en reducciones permanentes de capacidad, cierres, deslocalizaciones y expedientes de regulación de empleo (ERE)». «No es solo una cuestión de resultados empresariales: están en juego puestos de trabajo cualificados, inversiones y el futuro industrial de territorios enteros», avisa. A ello se suma el factor estratégico. Perder industria significa aumentar la dependencia de las importaciones y debilitar la autonomía europea.

No apoyar a la industria en este contexto también choca frontalmente con la apuesta del Gobierno español y de la UE por la reindustrialización y la descarbonización. «Resulta contradictorio defender la reindustrialización y promover la descarbonización de la industria mientras se mantienen unas condiciones energéticas que expulsan actividad productiva y frenarán las importantes inversiones destinadas a descarbonizar los sistemas de producción», denuncia la patronal catalana.



El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre

Foment del Treball plantea un plan de choque. En gas, reclama ayudas extraordinarias para compensar los sobrecostes de las empresas gasintensivas y un estatuto específico que aporte estabilidad al sector. En electricidad, pide elevar las compensaciones por costes indirectos de CO₂ hasta los 900-1.000 millones de euros (el máximo permitido), frente a los 600 millones previstos para 2026. También exige hacer estructural la rebaja del 80% de los peajes para los electrointensivos, revisar los costes de ajuste, reducir el impuesto eléctrico al mínimo comunitario y facilitar contratos de suministro a largo plazo.

La competitividad industrial, sostiene, necesita «decisiones concretas, presupuestos suficientes y un calendario de ejecución inmediato».

El precio del gas se ha disparado un 140% y el de la electricidad se ha más que duplicado

El sobre coste podría rozar los 1.000 M€ para el sector químico, avisa la patronal catalana